

Celebrada en Lake Success, Nueva York,  
el viernes 24 de febrero de 1950, a las 15 horas.

Presidente: C. BLANCO (Cuba).

Presentes: Los representantes de los países siguientes: Cuba, China, Ecuador, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, India, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Yugoslavia.

### 1. Orden del día provisional (S/Agenda 467/Rev. 1)

1. Aprobación del orden del día.
2. La cuestión India-Pakistán:
  - a) Carta del 5 de diciembre de 1949, dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas por el Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, remitiéndole el tercer informe provisional de la Comisión (S/1430, S/1430/Add.1, S/1430/Add.2 y S/1430/Add.3).
  - b) Carta del 3 de febrero de 1950 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el General McNaughton, representante permanente del Canadá en las Naciones Unidas, remitiéndole su informe sobre la cuestión India-Pakistán (S/1453).
3. Informe presentado por el Sr. V. García Amador, Presidente de la Comisión de Expertos del Consejo de Seguridad, relativo a las enmiendas al reglamento provisional del Consejo de Seguridad, propuestas por el representante de la India (S/1457, S/1457/Corr.1).

### 2. Aprobación del orden del día

*Queda aprobado el orden del día.*

### 3. La cuestión India-Pakistán (continuación)

*A invitación del Presidente, Sir Mohammad Zafrulla Khan, representante del Pakistán, el Sr. C. A. Leguizamón, Presidente de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán y otros miembros de la Comisión toman asiento a la mesa del Consejo de Seguridad.*

El PRESIDENTE: Si no hubiere objeción adoptaremos la interpretación consecutiva para el debate general sobre la cuestión India-Pakistán que va a iniciarse.

Antes de conceder la palabra al primer orador inscrito, deseo informar a los miembros del Consejo que la Presidencia ha recibido un proyecto de resolución suscrito por Noruega, el Reino Unido, los Estados Unidos de América y Cuba (S/1461), el cual será distribuido durante el curso de esta sesión. Dicho proyecto desde luego será discutido en una futura sesión del Consejo, una vez que los miembros del Consejo y los representantes de las partes en el conflicto hayan tenido tiempo de estudiarlo y de consultarlo con sus Gobiernos.

Sr. SUNDE (Noruega) (*traducido del inglés*): He observado con mucha inquietud la evolución de la cuestión de Cachemira, desde que el Consejo de Seguridad reanudó, en el mes de diciembre último, el examen de dicho asunto. A pesar de sus valientes esfuerzos, el General McNaughton no ha logrado eliminar las diferencias que existen entre el punto de vista de la India y del Pakistán. La grave divergencia que existe entre esas dos grandes naciones envenena casi diariamente sus relaciones y provoca nuevos desacuerdos cada vez más acerbos.

En el curso de la 458a. sesión celebrada por el Consejo de Seguridad el 29 de diciembre de 1949, me ocupé en particular de la propuesta del General McNaughton.<sup>1</sup> Como ya dije, la base de acuerdo que había propuesto el General McNaughton, parecía muy equitativa y justa. A ello yo agregué que no veía qué objeciones — compatibles con el objetivo que, según sus declaraciones, se habían fijado las partes de celebrar un plebiscito libre e imparcial — podían hacer dichas partes respecto a esa propuesta. Yo había formulado adrede mi declaración en términos prudentes, pues comprendía perfectamente que sería poco acertado emitir sobre la situación un juicio definitivo y categórico, mientras las partes mismas no hubieran expresado su opinión.

Desde esa sesión los dos países interesados han presentado sus pareceres extensa y detalladamente. Sus declaraciones han versado sobre casi todos los aspectos del conflicto de Cachemira. Sin embargo, el rasgo más importante de esas declaraciones se ha revelado en los argumentos que las partes han formulado a favor o en contra de la propuesta del General McNaughton. Hoy día contamos con elementos suficientes que nos permitan emitir un juicio sobre esa propuesta y sobre la actitud que las partes interesadas han adoptado al respecto. Por lo tanto, estimo que, como miembro del Consejo de Seguridad, nos incumbe ahora expresar clara y francamente nuestra opinión. Sólo así podrá el Consejo ayudar a las partes a encontrar una solución justa y práctica.

He escuchado con viva atención las declaraciones de las partes interesadas y he estudiado con el mayor detenimiento las actas taquigráficas de las sesiones 463a., 464a., 465a. y 466a. Me he esforzado igualmente por escuchar sin prejuicio alguno todos los argumentos a fin de no dejarme persuadir prematuramente por ningún razonamiento, por convincente que haya podido parecer. Pero ha llegado ahora el momento de emitir un juicio definitivo sobre la situación, y no tengo la menor duda respecto a cuál es el razonamiento que mejor se funda en la imparcialidad y en la justicia. Ese razonamiento es el del General McNaughton.

No quiero decir con ello que la propuesta del General McNaughton debe ser aceptada por las partes sin la menor modificación. Ambas partes han propuesto enmiendas, y es posible que algunas de las disposiciones pudieran ser mejoradas. Sin embargo, en cuanto a las disposiciones principales y a la manera de enfocar el problema, estoy firmemente convencido de que el General McNaughton tiene razón.

Su propuesta parte de lo que es evidentemente el punto de partida correcto, a saber que la India y el Pakistán han convenido que la condición jurídica futura

<sup>1</sup> El informe del General McNaughton sobre la cuestión India-Pakistán, documento S/1453, está fechado el 3 de febrero de 1950. El texto de la propuesta examinada en la 458a. sesión fue distribuido como documento de la sesión.

del Estado de Jammu y Cachemira se determine conforme a la voluntad del pueblo de ese Estado. Este acuerdo que apareció brevemente por primera vez en la parte III de la resolución del 13 de agosto de 1948 [S/1100, párrafo 75]<sup>2</sup> y que fué más tarde ampliado en la resolución del 5 de enero de 1949 [S/1196, párrafo 15],<sup>2</sup> no constituye simplemente una parte importante del edificio que la Comisión ha levantado a costa de tantos esfuerzos en sus dos resoluciones; constituye la clave de toda la estructura, la piedra sobre la cual descansan todas las demás partes del edificio y a la cual se hallan estrechamente relacionadas.

Esto no quiere decir que se deban descartar o rechazar las otras partes del acuerdo; por el contrario. Sobre este punto también comparto la opinión del General McNaughton. Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los dos Gobiernos ya han llegado, en gran parte, a un acuerdo sobre los principios fundamentales, y es preciso que se mantenga ese acuerdo.

No conviene perder de vista que, en virtud de las disposiciones de ese acuerdo — que fué incorporado en las dos resoluciones de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, y al cual acabo de aludir — las dos partes en el conflicto dieron las órdenes de cesación de las hostilidades el 1º de enero de 1949 (S/1196, párrafo 14). También en ese mismo acuerdo se basa absolutamente el acuerdo de cesación de hostilidades del 27 de julio de 1949 (S/1430, *Add.1, anexo 26*), en virtud del cual se establece concretamente una línea de demarcación sobre el terreno. Toda tentativa que se haga para disminuir la importancia de esos principios fundamentales o para reducirlos a la nada, no haría sino comprometer las disposiciones sobre la cesación de las hostilidades, así como todo el sistema que ha establecido la Comisión a costa de grandes esfuerzos.

Sabemos, pues la Comisión misma lo admite, que los cambios ulteriores ocurridos en esa situación tan dinámica han hecho anticuados e ineficaces algunos elementos de estructura. Después de todo, eso no es demasiado extraño. Habría sido verdaderamente un milagro que un acuerdo destinado a cubrir un corto período de transición hubiera retenido todo su valor a pesar de haberse retardado su aplicación durante más de un año. El problema que se plantea no consiste en una ecuación matemática. Se trata de seres humanos que cambian constantemente, de seres humanos cuyas fuerzas se modifican sin cesar. Sin embargo, me parece que la estructura principal del acuerdo, sus principios mismos, permanecen incólumes, y lo mismo se aplica a la clave, o sea a las disposiciones relativas al plebiscito. Con la buena voluntad de las dos partes, se podría facilitar el trabajo de reconstrucción y reemplazar las disposiciones anticuadas con otras nuevas que tuvieran enteramente en cuenta los cambios ocurridos en la situación.

Hay, sin embargo, una importante condición que conviene observar. Las nuevas disposiciones deben ser concebidas de manera que se adapten al edificio ya existente. Todo el acuerdo correría peligro si las dos partes, o una de ellas, exigieran nuevas disposiciones que fueran contrarias a los principios fundamentales ya adoptados. Y, evidentemente, el principio fundamental es — y creo que vale la pena repetirlo — que la condición jurídica futura del Estado de Jammu y Cachemira será determinada conforme a la voluntad del pueblo de ese Estado.

<sup>2</sup> El texto del primer y del segundo informes provisionales de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, documentos S/1100 y S/1196, figuran en las *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Tercer Año, Suplemento de noviembre de 1948, y Cuarto Año, Suplemento de enero de 1949.*

En el momento actual, cualquier argumento que descarte o desatienda ese principio fundamental podría no sólo resultar ajeno al caso, sino también destruir toda la estructura del acuerdo ya logrado. Esto es, sin duda lo que el General McNaughton tenía en mente cuando, en su propuesta, se pronunció en contra de los debates inútiles sobre cuestiones planteadas anteriormente.

Reconozco que no es siempre fácil determinar cuáles son los argumentos pertinentes sostenidos a propósito de cuestiones no resueltas todavía y cuáles no lo son. Sin embargo, no parece que sea difícil descartar algunos de ellos que carecen de toda relación con los problemas por resolver.

Estos problemas, como sabemos bien, se refieren a la parte II de la resolución del 5 de agosto de 1949 que trata de la desmilitarización antes del período en que se realice el plebiscito. Esa parte de la resolución contiene algunos principios que han sido aceptados como base de un acuerdo y cuyos detalles quedan todavía por determinar. Algunos de ellos son todavía incompletos e inadecuados a consecuencia de los cambios ocurridos en la situación. Cuando estos principios hayan sido substituidos por otros nuevos que tengan en cuenta la situación actual, habrá que reajustar la estructura establecida agregando todos los detalles necesarios para hacer así un todo orgánico.

Si las partes tienen debidamente en cuenta la naturaleza y las limitaciones de la tarea que queda por hacer, esa tarea será relativamente simple. Pero los problemas serán imposibles de resolver si las partes se extienden más allá de las cuestiones inmediatas y sostienen argumentos que tienden a rechazar los principios fundamentales del acuerdo existente.

Me parece que sobre este importante aspecto de la cuestión las dos partes han cometido errores. En el estado actual de la cuestión, parece ajeno al caso sustentar argumentos a favor o en contra de los efectos jurídicos que pueda tener la carta del Maharajá relativa a la incorporación a la India. Lo mismo cabe decir de los argumentos aducidos para probar que factores económicos y estratégicos o cuestiones relacionadas con la religión de la mayoría de la población militan a favor de la incorporación a una de las partes interesadas y en perjuicio de la otra. Estos argumentos son no sólo ajenos al caso sino también nocivos porque socavan el principio fundamental que ha servido de base al acuerdo. El plebiscito es el que determinará la condición jurídica definitiva del Estado de Jammu y Cachemira.

Quisiera agregar que este principio, clave de toda la estructura, tiene una importancia que trasciende de los límites de la fuerza obligatoria que le da el consentimiento de las dos partes. Este principio tiene un valor intrínseco porque en él está implícito, para decidir la suerte de Cachemira, el único criterio compatible con los ideales democráticos modernos.

Cabe recordar que los problemas no resueltos todavía se refieren únicamente a procedimientos prácticos cuya aplicación es indispensable para asegurar la desmilitarización de ambos lados de la línea de cesación de hostilidades a fin de establecer una situación que permita al Administrador del Plebiscito encargarse de sus funciones. Por lo tanto, las dos partes deben abstenerse fielmente no sólo de insistir en argumentos incompatibles o ajenos a este objetivo sino también de presentar argumentos de esa índole. En esta zona, más bien limitada, en la que el desacuerdo es legítimo y permitido, no veo sino dos consideraciones importantes que permiten pesar y

aquilar los argumentos presentados por las dos partes. Uno de ellos consiste en que la desmilitarización se efectúe lo antes posible. El otro, en que la desmilitarización se realice de tal manera que en ningún momento las poblaciones establecidas a un lado y otro de la línea de cesación de hostilidades tenga nada que temer. Volviendo a este punto, apoyo sin reservas los principios principales expuestos en la propuesta del General McNaughton.

En conclusión, pido otra vez a las partes, que se sirvan volver a examinar la actitud que han adoptado y recordar que en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, han asumido la obligación solemne de resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos y de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz ni la seguridad ni la justicia internacionales. Si abandonaran su esfuerzo por lograr una solución amistosa se crearía una situación trágica cuyas consecuencias nadie podría prever; esa situación sería doblemente trágica, si se recuerda que la propuesta del General McNaughton indica claramente la posibilidad de lograr una solución equitativa y honorable.

Sir Alexander CADOGAN (Reino Unido) (*traducido del inglés*): Los miembros del Consejo de Seguridad recordarán que el 29 de diciembre, en el curso de un breve debate sobre esa cuestión [458a. sesión], expuse la actitud del Gobierno del Reino Unido e indiqué que, en términos generales, apoyaba las proposiciones hechas a las dos partes por el General McNaughton. No me propongo repetir ahora los argumentos que formulé entonces, y que fueron plenamente aprobados por mi Gobierno. Ahora he recibido instrucciones para agregar algunas observaciones a mis declaraciones anteriores, teniendo en cuenta las declaraciones formuladas ante el Consejo por los representantes de la India y del Pakistán.

Todos los miembros del Consejo estarán de acuerdo en reconocer que la cuestión tiene para todos una importancia capital. Exige que prosigamos resueltamente la obra que hemos emprendido y que estimamos justa. Nuestro deseo es mantener y aumentar la autoridad y el prestigio de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para ajustarnos y aplicar el código de moral política encarnado en la Carta de las Naciones Unidas. Los hombres y mujeres del mundo entero han puesto sus esperanzas en nosotros y no debemos, dejando de cumplir nuestra obligación, desengañarles.

Hace ya más de dos años que el Consejo de Seguridad se ocupa de la controversia sobre Cachemira. Considerable trabajo se ha realizado en ese terreno, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, y aun cuando no se ha encontrado todavía una solución, el trabajo realizado no ha sido de ninguna manera infructuoso. Se nos proponen hoy puntos de acuerdo que, indudablemente, no tienen el alcance que hubiéramos deseado y tenemos derecho a esperar, pero debemos reflexionar al respecto antes de rechazar todo elemento importante de acuerdo que pudiera servir de base a un arreglo.

No quiero decir que debemos mostrarnos intransigentes o inflexibles. Nos hemos reunido aquí para examinar equitativa e imparcialmente el problema del cual nos ocupamos, y debemos, desde luego, tener debidamente en cuenta todas las circunstancias que sean pertinentes. Pero si queremos que hoy y en el futuro la obra del Consejo sea eficaz, debemos insistir en que se

respete su autoridad y en que no se rechacen ni eludan sus recomendaciones.

Creo útil hacer esta observación desde el principio, porque me parece entrever una tendencia a volver a tratar el origen de este asunto de una manera que no podrá contribuir a resolver pacíficamente la controversia, mediante una fórmula que tenemos el deber de encontrar. En su declaración del 29 de diciembre último, el General McNaughton expresó la opinión de que todo método jurídico o histórico de abordar el problema exigiría el examen de detalles numerosos y complejos. No pienso ahora ocuparme de esa historia pasada.

El representante del Pakistán ha pretendido que la controversia entre la India y el Pakistán sobre la cuestión de Cachemira no empezó con la incursión de las tribus en octubre de 1947. Todo intento de establecer las responsabilidades que han creado la presente situación obligaría a investigar la alegación del Pakistán según la cual las hostilidades comenzaron cuando el Maharajá atacó sin provocación a sus súbditos musulmanes. No quiero expresar ningún parecer sobre esta alegación; sólo hablo de ella para mostrar los peligros que surgirían si se volviera a tratar detalladamente la historia del asunto. Me parece que corremos el peligro de perder de vista nuestro objetivo real si nos enzarzamos en el debate de algunos puntos que no se relacionan directamente con la solución práctica del problema. Sé perfectamente que se ha alegado que conviene examinar propuestas que tengan en cuenta los antecedentes de los acontecimientos anteriores. Esto es lo que ha sucedido en muchas negociaciones pero, en el caso actual, debemos recordar que, si deseamos lograr nuestro objetivo, que es el de permitir al pueblo de Cachemira expresar libremente sus deseos y decidir así la suerte del Estado, los acontecimientos históricos perderían entonces toda importancia, y se podría, conforme a mi deseo, borrar con una esponja lo que ya pertenece al pasado.

El Consejo discute en realidad una cuestión de sistema y procedimiento: los preparativos para consultar la voluntad libremente expresada de la población. Tanto la India como el Pakistán han declarado que aceptarán cualquier procedimiento que permita al pueblo de Cachemira expresar sus opiniones. Me complace sobremanera observar que en sus declaraciones, formuladas ante el Consejo, los representantes de la India y del Pakistán, aceptaron al parecer sin reservas, los objetivos que figuran en los incisos a), b) y c) del párrafo 1 de las propuestas del General McNaughton (S/1453).

Acaso convendría recordar las disposiciones del párrafo 1. El inciso a) de este párrafo proclama la intención de determinar la suerte del Estado por un plebiscito libre e imparcial. Pero además, la cláusula prevé que el plebiscito debe celebrarse lo antes posible. Lo repito, lo antes posible. El inciso b) subraya el deseo que tienen los dos Gobiernos de arreglar la controversia conforme a la voluntad libremente expresada de los habitantes de Cachemira. Encontramos en estas dos disposiciones — disposiciones aceptadas por los Gobiernos de la India y del Pakistán — un principio de suma importancia. Ambos Gobiernos reconocen que la voluntad del pueblo será decisiva y conviene en darle la oportunidad de expresar libremente su deseo tan pronto como pueda hacerse.

Lejos está de mí la idea de eludir consideraciones jurídicas que sean pertinentes. Pero ¿acaso se puede sostener que las esperanzas y aspiraciones del pueblo de ese Estado dependen absolutamente de la cuestión de saber quién ejerce en este momento la soberanía sobre Cachemira? También se plantean las cuestiones

del licenciamiento y del acantonamiento de las tropas. ¿Deseará una u otra parte verse acusada de tratar de impedir la expresión libre y franca de la voluntad del pueblo? ¿Querrá una u otra parte permitirse el lujo de prolongar la dificultad actual insistiendo en que se licencie a tal o cual fuerza armada en tal o cual momento? Basta con plantear estas cuestiones para conocer la respuesta.

¿Cómo podría pues una u otra parte justificar su insistencia en puntos tales como los precedentes? Ello no serviría para nada y, sin que las dos partes lo quisieran, lo sé perfectamente, no serviría sino para frustrar toda expresión de la voluntad del pueblo en una fecha cercana. Toda dilación presenta sus peligros. En el caso actual, el tiempo no sería un remedio. Si no se toman inmediatamente medidas concretas, el mal que aflige actualmente no sólo al infortunado Estado de Jammu y Cachemira, sino también a todo el subcontinente de la India, podría hacerse incurable. ¿Quién podría desear que cuestiones jurídicas de un interés dudoso vinieran a frustrar todo progreso? Aquí también basta con plantear la cuestión para saber la respuesta. Si se requieren seguridades y garantías, corresponde a las Naciones Unidas establecerlas; y no veo razón alguna que impida al Consejo adoptar las medidas necesarias cuando llegue la ocasión.

Quisiera recordar al Consejo algunas de las palabras pronunciadas por el Primer Ministro de la India, gran hombre de Estado cuya sabiduría todos admiramos. En 1947 el Primer Ministro dijo: "Hemos declarado que la suerte de Cachemira deberá en definitiva ser decidida por su pueblo. Hemos prometido esto, y el Maharaja ha apoyado esta promesa no sólo con respecto al pueblo de Cachemira sino con respecto al mundo entero. No queremos ni podemos retractarnos". En la misma declaración, el Primer Ministro añadió: "Tan pronto como Cachemira quede libre del invasor, nuestras tropas no tendrán ninguna necesidad de permanecer allí; la suerte de Cachemira quedará en manos de su pueblo". Esto es lo que dijo un noble y sabio hombre de Estado. No nos dejemos cegar ni ofuscar por cuestiones de secundaria importancia hasta el extremo de descuidar esos principios fundamentales.

Se ha avanzado considerablemente hacia la realización de las promesas formuladas por el Primer Ministro de la India. Con el asentimiento de las dos partes, nuestra Organización ha designado un hombre de fama mundial para que administre el plebiscito. Además, ambas partes han aceptado que a la persona a quien hemos designado se le encargue de ciertas funciones, inclusive la relacionada con el destino de las fuerzas armadas que se encuentran todavía en Cachemira, antes de ocuparse de la cuestión del plebiscito mismo. Me parece que estas son medidas muy importantes para lograr una solución final y segura de la cuestión, y no veo razón válida alguna que nos impida completar nuestra labor conforme a los principios que nos han guiado hasta hoy. Me parece que ha llegado el momento de que el Consejo tome la iniciativa y de que sus miembros indiquen francamente como, a su juicio, se podría salir de la dificultad actual y contribuir al logro de una solución justa, equitativa y aceptable para las dos partes interesadas.

No trataré de ocultar la decepción de mi Gobierno ante la negativa de las partes a aceptar las propuestas del General McNaughton. A juicio de mi Gobierno, estas propuestas ofrecen, en general, una base que permitiría resolver la cuestión rápida y equitativamente. Debo confesar que sentimos profundamente ver que las

respuestas de los dos Gobiernos interesados, no justifican las grandes esperanzas que habíamos puesto en el resultado de las discusiones sobre las propuestas del General McNaughton.

Le corresponde ahora al Consejo encontrar otros medios para realizar los planes que se habían hecho. Creo que, después de las observaciones que he formulado en esta sesión, no cabe la menor duda respecto a la actitud del Reino Unido. Mi delegación ha podido celebrar consultas en el curso de los últimos días con algunas de las otras delegaciones y se ha unido al proyecto de resolución que va a ser presentado al Consejo esta tarde para su examen [S/1461]. Permítaseme hacer constar el hecho de que mi delegación es una de las patrocinadoras de ese proyecto de resolución y de que lo hace porque está convencida de que el procedimiento propuesto en el proyecto tiende a poner en vigor, lo antes posible, el acuerdo que existe entre las partes respecto a la necesidad de consultar a los pueblos interesados. A mi juicio, tanto el Gobierno de la India como el Gobierno del Pakistán han prometido su cooperación total y sin reservas a los preparativos que permitirán al pueblo de Cachemira expresar su opinión por el método democrático de un plebiscito libre e imparcial. Por lo tanto, los dos Gobiernos deberán hacer todo lo posible por aplicar las disposiciones enunciadas en la resolución aprobada por la Comisión el 5 de enero de 1949.

Con respecto a la cuestión de la desnilitarización, los miembros del Consejo observarán que el proyecto de resolución presentado no sigue la sugestión del General McNaughton, según la cual las cuestiones enumeradas en el párrafo 3 de sus propuestas deben ser objeto de un acuerdo concertado en Nueva York. Si el Consejo decide nombrar un representante, como se propone en el proyecto de resolución, estimo que será oportuno dejar que ese mismo representante decida el procedimiento que se deba adoptar. Creo que dicho representante podría empezar esas negociaciones en Nueva York.

En conclusión, me permito pedir al Consejo y a las dos partes que acojan favorablemente el proyecto de resolución. Es indudable que una u otra parte, y tal vez las dos, encontrarán en este proyecto puntos que quisieran modificar; (esto ocurre siempre cuando se presenta una solución de conciliación entre dos opiniones), pero abrigo la esperanza de que ambas partes reconocerán en el proyecto de resolución un esfuerzo sincero de los miembros del Consejo de Seguridad por formular propuestas que sean a la vez equitativas y eficaces. Estamos, y así lo espero, a punto de encontrar la solución a un problema que ha venido envenenando demasiado tiempo las relaciones entre los países. Por desgracia, no es ésta la única cuestión litigiosa entre estos dos países; pero si se puede resolver satisfactoriamente, se podría también encontrar una solución a las demás. Se ha llegado a un acuerdo con respecto al método que se debe emplear para resolver la cuestión; las dilaciones y dificultades sólo provienen de divergencias de opinión en cuanto a la manera de proceder; espero sinceramente que las deliberaciones actuales del Consejo contribuyan eficaz y provechosamente a allanar estas divergencias.

Sr. CHAUVEL (Francia) (*traducido del francés*): Mi delegación ha seguido con la mayor simpatía los esfuerzos de conciliación realizados por el General McNaughton durante su Presidencia del Consejo, conforme a nuestra resolución del 17 de diciembre de 1949. La delegación de Francia le había alentado a proseguir sus esfuerzos aun después de expirado el período de funciones de su

Presidencia y de su participación en nuestros trabajos. Mi delegación, por lo tanto, ha examinado con especial atención el informe sobre sus gestiones.

No puedo disimular la decepción que ha sentido mi delegación al comprobar una vez más que el esfuerzo realizado de la manera más consciente, por un hombre cuya imparcialidad y autoridad moral no pueden ponerse en duda, se haya estrellado contra obstáculos demasiado conocidos.

El Consejo de Seguridad empezó a ocuparse del asunto de Jammu-Cachemira en virtud de una comunicación del representante de la India [S/628] el 1º de enero de 1948, es decir, hace hoy casi 26 meses. Desde entonces, las medidas adoptadas por las Naciones Unidas se han distinguido por cuatro actos principales, a saber: las resoluciones del Consejo del 20 de enero de 1948 [S/654] y del 21 de abril de 1948 [S/726] por las que se creó la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán y se fijaron su composición y sus atribuciones, y las resoluciones de dicha Comisión aprobadas el 13 de agosto de 1948 y el 5 de enero de 1949. Esta última Comisión dividía en tres etapas la solución del conflicto: la cesación de las hostilidades, la organización de la tregua por la desmilitarización de todos los territorios interesados y la organización del plebiscito.

¿Cuál es la situación después de transcurridos 26 meses desde la presentación del asunto al Consejo y después de casi 14 meses desde la aprobación de la segunda resolución de la Comisión?

Las partes han aceptado las resoluciones del 13 de agosto de 1948 y del 5 de enero de 1949. El 1º de enero de 1949, cesaron las hostilidades, y el 27 de julio de 1949 convinieron en establecer la línea de tregua [S/1430/Add. I/Anexo 26]. Las partes han aceptado el principio del plebiscito y han convenido en la designación del Almirante Nimitz como Administrador del Plebiscito. Eso es todo. Es decir, que de las tres etapas previstas en la resolución del 5 de enero de 1949, sólo la primera, la relativa a la cesación de las hostilidades, ha sido terminada. Por otra parte, no se ha adelantado nada hacia la realización de un acuerdo de tregua, el cual sólo puede tener como base la desmilitarización, ni tampoco, a pesar de la designación del Almirante Nimitz, hacia la organización del plebiscito. En efecto, el obstáculo contra el cual se estrellan, desde hace ya algún tiempo, todos los esfuerzos es la desmilitarización; no el principio de esa desmilitarización, sino sus características.

Si examinamos los intereses que entran en juego, vemos que se trata, en el fondo, de determinar la dependencia política del Estado de Jammu y Cachemira. Esta dependencia interesa en primer lugar a las poblaciones de dicho Estado; indicaré de paso que cualquiera que fuere la solución de este asunto, no podrá dejar de tener en cuenta la cuestión de los refugiados aunque no se trate de otra cosa que de su participación en el plebiscito o de su instalación definitiva. Esta cuestión interesa también, evidentemente, y por razones diversas, a los dos Estados que alegan derechos sobre esos territorios, es decir, la India y el Pakistán.

Sin embargo, subrayo en efecto que sea cual fuere la importancia que la India y el Pakistán atribuyan a la defensa de sus pretensiones respectivas, esos dos Estados tienen en este asunto un interés más importante todavía que hacer prevalecer, y ese interés es la cesación misma del conflicto que los divide y los separa. ¿Es concebible, en efecto, en la situación actual de Asia y del mundo, que dos grandes países que han recientemente logrado el pleno ejercicio de su soberanía, que tienen que hacer frente a todos los problemas de organización y a los

ajustes políticos, económicos y financieros que les impone su nueva condición jurídica, agoten sus energías y sus fuerzas en una lucha que acaba de destruir su interdependencia pasada, y que compromete tan gravemente la solidaridad que la geografía les impone para el porvenir? ¿Es posible que estos dos Estados, que pertenecen al mismo gran grupo de Estados soberanos y que, además, son ambos Miembros de las Naciones Unidas, sean indiferentes, no sólo a sus mejores intereses sino también a los de la comunidad de las naciones?

Esta comunidad, la comunidad mundial que nosotros representamos en este Consejo, no puede tener más deseo que el de poner fin a una situación complicada y peligrosa, y hacer desaparecer del mapa del mundo y de un punto tan importante del mapa del mundo, una zona turbulenta de la cual pueden surgir tempestades. Frente a consideraciones de tanto peso, no veo principio alguno que pueda invocarse con validez.

El Gobierno de la India reclama para sí una especie de legitimidad. Admite el armisticio, pero rechaza como ilegítimas a las autoridades que administran actualmente la zona septentrional y oriental. El plebiscito, a su juicio, debe hacerse en un Estado unificado, colocado bajo la sola autoridad del Jeque Abdullah. Además del hecho de que ningún principio de legitimidad puede oponerse a la voluntad de los pueblos, Cachemira parecería actualmente dividida no sólo por dos ocupaciones, sino también por tener dos Gobiernos nacidos ambos de dos insurrecciones contra la autoridad del Maharaja. Si, del lado de la India, el Jeque Abdullah, invocando los principios de la democracia, se ha apoderado del poder después de largos años de lucha, y de sufrimientos en la cárcel, del otro lado, el insurgente Mohammed Ibrahim Khan, invocando los mismos principios, le hace frente, apoyándose en 32 batallones cuyos soldados están reclutados entre los habitantes de regiones por él dominadas.

Frente a esta situación, nuestra actitud es clara; nos la impone la Carta de las Naciones Unidas. Sólo la población misma y sólo ella debe decidir su suerte. Debe hacerlo en condiciones libres de toda presión. Hubiera sido deseable que los dos Estados vecinos se pusieran de acuerdo sobre esas condiciones. Pero como existe desacuerdo a ese respecto, no queda otro camino que volver a poner este asunto en manos de la Organización para que asuma la responsabilidad del caso; y no veo qué objeciones puedan hacerse a ello. No dudo de que las partes, cualesquiera que sean sus sentimientos sobre el fondo mismo del problema, anhelan profundamente que se respeten los deseos de la población. Salta a la vista que las Naciones Unidas no desean una solución determinada, sino una solución. Su objetividad e imparcialidad son la mejor garantía que puede darse a las poblaciones del Estado de Jammu y Cachemira y, por lo tanto, a los Gobiernos de la India y del Pakistán.

Ese es el principio que la delegación de Francia ha mantenido siempre en este asunto y el cual, a su juicio, debe imponerse a fin de completar las dos etapas restantes a saber, la organización de la tregua por la desmilitarización de los territorios en su totalidad y la organización del plebiscito.

De qué manera las Naciones Unidas harán frente a la situación cuando se plantee la cuestión de organizar el plebiscito, será asunto de otros debates. Hoy sólo se trata de organizar la tregua para la desmilitarización y a ese fin han tendido los esfuerzos del General McNaughton y sus proposiciones a las partes. Esas proposiciones parecen a mi delegación eminentemente



razonables. Tienen en cuenta, para la fase de las operaciones con las cuales se relacionan, tres condiciones que fueron enumeradas aquí mismo el 24 de enero de 1948 [235a. sesión] por el representante de Francia, y que son:

"1. El retiro de las tropas extranjeras del Estado de Cachemira.

"2. El retorno a ese Estado de los habitantes, sin distinción de raza, hindúes o musulmanes, y su reinstalación en el lugar de origen.

"3. La instalación de una administración libre que no ejerza presión sobre la población y que dé garantías absolutas para la celebración de elecciones libres".

Este es, repito, el motivo por el cual la delegación de Francia ha sentido profundo desengaño por las reservas formuladas sobre esas proposiciones, y que han impedido hasta hoy su aplicación.

Mi delegación no puede sino recomendar hoy al Consejo y a las partes que examinen de nuevo sinceramente esas proposiciones. Mi delegación ruega a las partes que no escatimen ningún esfuerzo de conclusión que permita al fin, en esta ocasión tan importante, asegurar el triunfo de los principios que los Miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a defender y que, en este caso preciso, expresamente han hecho suyos.

Sr. GROSS (Estados Unidos de América) (*traducido del inglés*): Deseo, para comenzar, anunciar que mi delegación hace suyas sin reservas las declaraciones que han formulado esta tarde los representantes de Noruega, del Reino Unido y de Francia.

El conflicto sobre el Estado de Jammu y Cachemira no es sino uno de los muchos problemas que han creado dificultades en las relaciones de la India y el Pakistán desde que se crearon estos dos Estados, a raíz de la partición de la antigua India Británica. El Consejo recordará que cuando en enero de 1948 la India presentó la cuestión de Cachemira [S/628],<sup>3</sup> el Pakistán presentó por su parte otros tres problemas [S/646 y S/646/Corr.1]<sup>4</sup>, a saber: los acontecimientos ocurridos en el Estado de Junagadh, la reciente mantaza de las poblaciones inmigrantes en el Punjab y las dificultades que habían surgido entre la India y el Pakistán sobre algunos acuerdos relativos a la partición. El Consejo decidió luego — y mi Gobierno considera acertada esa decisión — que todos esos problemas estaban relacionados entre sí y que la solución de la controversia de Cachemira ayudaría a resolver satisfactoriamente otras cuestiones.

¿Qué ha ocurrido desde entonces? Las diferencias entre la India y el Pakistán se han multiplicado desgraciadamente. Hoy, los dos países se hacen una guerra económica que ha originado el paro casi completo de su intercambio comercial. Otros problemas tales como la cuestión de los ríos del Punjab y la de los bienes de las poblaciones evacuadas, no han sido resueltos todavía. En resumen, las relaciones de la India y el Pakistán han empeorado considerablemente.

El hecho es grave. Está en juego la suerte de más de 400 millones de habitantes que hace apenas dos años y medio se encargaron del Gobierno de sus nuevos países con la esperanza de mejorar su situación económica y social. Esta esperanza está siendo destruida por la tensión que se manifiesta permanentemente entre la India y el Pakistán, que retarda y compromete la concentración de sus cualidades y de sus energías en obras constructivas.

Pero existe igualmente en este problema un aspecto más tranquilizador. Los dirigentes de la India y del Pakistán saben que las discrepancias que existen entre sus países frustran las aspiraciones de sus pueblos. Esos dirigentes han declarado repetidas veces que esas diferencias debieran arreglarse, y arreglarse pacíficamente. El Consejo de Seguridad confía, por lo tanto, en que los dos Gobiernos harán esfuerzos incansables para llegar a un arreglo de sus divergencias. El Consejo de Seguridad está dispuesto, hoy como en épocas pasadas, a ayudarles. Si las dos partes, con ayuda del Consejo de Seguridad, pueden llegar a resolver la cuestión de Cachemira, mi Gobierno está convencido de que la buena voluntad de la India y el Pakistán permitirá que se llegue rápidamente a la solución de las demás controversias que les separan.

El Consejo de Seguridad ha tratado ya diversas cuestiones de gran importancia para la comunidad internacional y ha adquirido probablemente, en el curso de su examen, una experiencia que, en parte, es de carácter general. Cada vez que el Consejo de Seguridad se ha encontrado ante una controversia que podría entrañar un conflicto armado, su primer paso ha sido obtener la cesación de las hostilidades. Las partes de una controversia deben en primer lugar dejar de combatir. Esto significa concertar un acuerdo y establecer una línea de cesación de hostilidades. Si fuere necesario, el Consejo de Seguridad debe, como lo hizo en la cuestión de Palestina, tomar disposiciones expresas, con arreglo al Capítulo VII de la Carta e insistir en que se ponga fin a las hostilidades.

Sin embargo, la cesación de las hostilidades no es sino una medida provisional. Es la primera medida necesaria para calmar los ánimos en una controversia que ha llegado al punto crítico. La experiencia adquirida por el Consejo ha mostrado que el peligro puede repetirse cuando no se adoptan rápidamente medidas encaminadas a conseguir un arreglo duradero.

Después de la cesación de las hostilidades, la medida siguiente consiste en separar las fuerzas contrarias y, si fuera necesario, reducir paulatinamente sus efectivos militares. A medida que se efectúa ese proceso, la tirantez en la línea de cesación de hostilidades disminuye y su importancia se atenúa; luego se llega a un acuerdo de carácter más permanente, como los acuerdos de armisticio en Palestina y la tregua impuesta por el Acuerdo de Renville [S/649, *apéndice XI*] en el caso de Indonesia.

La experiencia adquirida en ésta y en otras circunstancias similares fué reconocida en la Conferencia sobre el problema de Indonesia, celebrada en Nueva Delhi hace 13 meses.

De la experiencia adquirida por el Consejo de Seguridad hay que aprovechar dos importantes lecciones. En primer lugar, la supresión de la tirantez militar entre las partes en una controversia sólo constituye una medida provisional a la que debe seguir rápidamente un arreglo político duradero. En segundo lugar, si la consecución de un acuerdo de cesación de hostilidades y el establecimiento de un plan de desmilitarización constituyen medidas respecto a las cuales el Consejo puede, si fuere necesario, tomar la iniciativa, corresponde exclusivamente a las dos partes en la controversia, llegar a una solución política duradera. El acuerdo y la cooperación de esas partes son elementos indispensables.

En la cuestión que examina actualmente el Consejo, la India y el Pakistán han reconocido la necesidad de aplicar este plan general. A consecuencia de los esfuerzos

<sup>3</sup> Véase *Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Tercer Año, Suplemento de noviembre de 1948*, documento S/1100, anexo 28.

<sup>4</sup> *Ibid.*, anexo 6.

numerosos y loables de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán y gracias a la cooperación de las dos partes en la controversia, los Gobiernos de la India y del Pakistán se han puesto de acuerdo sobre algunas de las bases de arreglo expuestas en la resolución aprobada el 13 de agosto de 1948 y el 5 de enero de 1949 por la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán. Los principios que inspiran esas resoluciones son los siguientes: la cesación de las hostilidades, la desmilitarización del Estado de Cachemira a fin de establecer condiciones que permitan a la población una vida más normal; y finalmente, un plebiscito libre e imparcial para decidir el destino del Estado de Cachemira conforme a la voluntad libremente expresada por su población mediante ese plebiscito. El primero de estos principios encontró su expresión en la concertación de un acuerdo de cesación de hostilidades cuyas disposiciones fueron establecidas por las partes mismas, a iniciativa de la India, el 1º de enero de 1949, y mediante la fijación en julio de 1949 de una línea definitiva de cesación de hostilidades.

Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán y, más tarde, del General McNaughton, las partes no han podido llegar a un acuerdo respecto a la aplicación de la parte de la resolución de la Comisión, que trata de la desmilitarización. Los obstáculos que han surgido obedecen, en parte por lo menos, a las divergencias de pareceres en cuanto a los aspectos jurídicos y técnicos de la controversia. Así, por ejemplo, la actitud de la India se ha fundado, en parte, en un argumento jurídico, a saber, que el Estado de Jammu y Cachemira se había incorporado a la India. Por su parte, el Pakistán ha puesto en duda este argumento y ha declarado que las reclamaciones de la India han sido contrarrestadas por ciertos factores geográficos, económicos y religiosos.

Desde que se planteó esta cuestión se ha demostrado que si la controversia debía recibir una solución duradera, era preciso que el Acuerdo que concertaran los dos Estados se estableciera sobre una base política amplia. Desde el comienzo, las dos naciones han aceptado el principio según el cual la cuestión de la vinculación del Estado de Jammu y Cachemira debe determinarse por la voluntad libre e imparcialmente expresada de la población, bajo los auspicios del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, al escuchar con el mayor respeto los argumentos que las partes han presentado sobre los aspectos jurídicos y técnicos de la cuestión, el Consejo de Seguridad y la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán han sostenido siempre que la solución de este problema no es ni fundamental ni conduce a un justo arreglo de la controversia. Así, al tratar de resolver la cuestión, tomando en cuenta los puntos de acuerdo que ya existen, debíamos evitar todo debate estéril sobre estos problemas y concentrar toda nuestra atención en los problemas urgentes del presente y del futuro.

Estas son las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando abordemos el examen del problema de la desmilitarización. La desmilitarización no prejuzga los derechos de las partes ni el fondo de las reclamaciones que formulan. No debe, en consecuencia, fundarse en estos derechos ni en estas reivindicaciones. Constituye, empero, una condición previa, esencial a la solución de la controversia. Felizmente, en sus esfuerzos por ayudar a las partes a resolver el problema, el Consejo de Seguridad ha visto que su tarea ha sido facilitada por el hecho de que ambas partes han aceptado la desmilitarización de Cachemira. Por lo tanto, el problema consiste

en saber, no si conviene que haya desmilitarización, sino cómo se efectuará la desmilitarización.

Este es el objetivo inmediato y esencial que se ha propuesto al Consejo de Seguridad en el proyecto de resolución presentado, conjuntamente por mi delegación y las delegaciones de Cuba, de Noruega y del Reino Unido. En el estado en que están las cosas, parece necesario que el Consejo de Seguridad, como lo propone el proyecto de resolución, haga un llamamiento a las partes para que lleguen a un acuerdo sobre un plan práctico de desmilitarización y apliquen ese plan, el cual constituye una medida indispensable antes de llegar a una etapa final, o sea la de la determinación de los deseos del pueblo del Estado. El Consejo de Seguridad cumpliría igualmente el deber que le incumbe y suministraría los medios de ayudar a las partes a lograr ese acuerdo, designando un representante que se encargara de proseguir el trabajo ya comenzado por el Consejo de Seguridad y por la Comisión. Ese representante se encargaría también de fiscalizar la aplicación de las medidas de desmilitarización que se acordaran al efecto.

Desgraciadamente, el Gobierno de la India no ha podido aceptar las medidas de desmilitarización propuestas a las dos partes por el General McNaughton. A nuestro parecer, los principios en que se inspiran esas propuestas son lógicos y justos. A base de ellos, en el proyecto de resolución propuesto por Cuba, los Estados Unidos de América, Noruega y el Reino Unido, se pide a los Gobiernos de la India y el Pakistán que preparen y apliquen un plan de desmilitarización.

Las propuestas del General McNaughton se fundan principalmente en el principio según el cual las fuerzas armadas, de ambos lados de la línea de demarcación, fijadas en el momento de la suspensión de las hostilidades, sean reducidas, por retiro, licenciamiento y desarme, o por etapas previstas a fin de no atemorizar en ningún momento a la población que reside en ambos lados de la línea de cesación de hostilidades. Las fuerzas armadas deben ser reducidas a un mínimo compatible con el mantenimiento de la seguridad y del orden público en esos lugares. El número y el acantonamiento de esas tropas deberán ser tales que, en el curso del plebiscito, no estorben a la población en la libre expresión de sus deseos. Ninguna de las partes ha presentado objeción alguna a este principio.

Hay otro principio fundamental y es que el problema de la desmilitarización debe ser tratado como un todo indivisible. Se recordará que las resoluciones de la Comisión establecieron que las fuerzas locales al oeste de la línea de demarcación fijada en el momento de la cesación del fuego, así como las fuerzas locales del lado indio de esta línea, deberían ser disueltas durante el período ulterior del plebiscito, y no a partir del período de tregua, es decir, desde el momento en que las tropas regulares de la India y del Pakistán fueran retiradas. La distinción así establecida en la fecha del retiro constituyó más adelante uno de los mayores obstáculos que encontró la Comisión al tratar de lograr un acuerdo de desmilitarización. En las negociaciones de mediación, la India declaró que la dispersión de las fuerzas locales del otro lado de la línea de cesación de fuego debía sincronizarse con el retiro de las fuerzas regulares de la India.

El concepto de efectuar la desmilitarización en una sola etapa más bien que en el curso de las dos etapas sucesivas previstas en las resoluciones de la Comisión, es compatible con lo que debiera ser el factor dominante en el asunto de la desmilitarización de Cachemira, a saber, la necesidad de reducir en todo momento la posi-

bilidad de que se reanuden las hostilidades en la línea de demarcación aceptada en el momento de la cesación del fuego. Las etapas adoptadas para la desmilitarización deben, por lo tanto, ser tales que, al terminarse el período previsto a ese efecto, no permanezcan en el Estado fuerzas armadas capaces de una agresión.

Las proposiciones presentadas se apoyan igualmente en el principio que consiste en comprender en un programa coordinado de desmilitarización todas las regiones del Estado inclusive aquellas que están situadas al norte de la línea de demarcación, aceptadas en el momento de la suspensión del fuego. Mi Gobierno cree que este principio es igualmente correcto y se ajusta al objetivo esencial de toda desmilitarización. Las conclusiones de la Comisión en cuanto a la desmilitarización de la región septentrional son claras y, a nuestro juicio, bien fundadas y prácticas. La Comisión concluyó que "la entrada de las fuerzas de la India en la región situada al norte de la línea fijada para la cesación del fuego, hubiera provocado así inevitablemente la reanudación de las hostilidades". [S/1430, párrafo 273]

El informe de la Comisión continúa diciendo [S/1430, párrafo 275]:

"La situación que existe hoy en la región septentrional es de tal naturaleza que el establecimiento de guarniciones del ejército de la India en cualquier punto más avanzado que los que actualmente ocupa, ocasionaría una extensión de las actividades militares del Gobierno de la India, si bien no supondría necesariamente un incremento del potencial militar que ambos Gobiernos han convenido en no aumentar".

Continúa citando el párrafo siguiente del informe de la Comisión:

"En la Conferencia Militar de Karachi, celebrada en el mes de julio, quedó resuelto el asunto de la línea de cesación del fuego. La India y el Pakistán ya han trazado y aceptado la línea de demarcación. Hasta que se creen las condiciones previstas en la resolución del 5 de enero y se restablezca la normalidad en el Estado de Jammu y Cachemira, la línea que actualmente garantiza que no se reanudarán las hostilidades, debería ser escrupulosamente respetada por los Gobiernos de la India y del Pakistán y las fuerzas adversas deberían mantenerse tras ella."

Estimamos muy equitativo, justificado y conforme a nuestras obligaciones como miembros de este Consejo dedicado al arreglo pacífico de las controversias, recomendar a las partes que acepten un principio que refuerza el concepto y valor de la línea de demarcación y que evita el peligro de que se extiendan las operaciones militares.

No debe sacarse ninguna conclusión por el hecho de que en su informe la Comisión no ha tratado expresamente la cuestión de la administración provisional de la región durante el período de desmilitarización. Habiendo llegado la Comisión a la conclusión de que no facilitaría la organización del plebiscito sancionar una extensión de las operaciones militares más allá de la línea de demarcación aceptada en el momento de la cesación del fuego, es perfectamente razonable pensar que la Comisión consideró que era inútil aludir a un cambio en la administración de la región por cuanto un cambio de esa índole dependería de una extensión de las operaciones militares o entrañaría el riesgo de esa extensión.

Quisiera ahora pasar a la parte del proyecto de resolución que trata de la designación de un representante de las Naciones Unidas cuya misión consistiría en ayudar

a elaborar el programa de desmilitarización que resultara de las negociaciones ulteriores, y en fiscalizar la aplicación de ese programa. Mi Gobierno presta asimismo todo su apoyo a esta parte del proyecto de resolución.

Después de haber examinado a fondo todos los elementos de la cuestión, la Comisión estima que una sola persona podrá más eficazmente dirigir las negociaciones y celebrar las consultas necesarias con las partes y entre ellas.

El General McNaughton apoyó y sancionó esta recomendación de la Comisión. Para cumplir las funciones que el Consejo de Seguridad le confiera, el representante así designado deberá mantenerse en estrecha y continua comunicación con los dos Gobiernos. Una sola persona estará en mejores condiciones para establecer la buena inteligencia y la confianza necesarias para una comunicación de esta índole. Al decir esto no quiero por supuesto criticar las relaciones que han existido entre la Comisión y los dos Gobiernos; quiero simplemente subrayar el hecho de que una persona sola puede mantenerse en comunicación constante y mantener la buena inteligencia de día en día, tan necesaria en las negociaciones delicadas, mucho mejor que una Comisión compuesta de personalidades diversas en la cual hay el peligro constante de que se produzcan cambios en su personal. En negociaciones de esta índole los menores matices tienen su importancia y es más probable que esos matices sean menores si ocurren en la mente de un solo individuo que si estuvieran dispersos y acaso fueran evaluados según los criterios diferentes de diversas personas.

Me es grato poder unirme a varios de mis distinguidos colegas del Consejo de Seguridad para someter el proyecto de resolución que ha sido presentado al Consejo esta tarde. Como miembros leales del Consejo de Seguridad y como amigos a la vez de la India y del Pakistán, hemos querido aprovechar, en lo que concierne al problema de Cachemira, las lecciones que el Consejo aprendió al examinar otras controversias, así como el conocimiento que hemos adquirido de los factores especiales de la controversia que separa a los dos países. A nuestro juicio, este proyecto de resolución se funda en los principios que ya han aceptado las dos partes. Estamos seguros de que este proyecto de resolución contribuirá a mejorar las relaciones entre la India y el Pakistán, permitiéndoles a ambos países llegar rápidamente a la desmilitarización del Estado de Jammu y Cachemira y a un arreglo final de la controversia, conforme a la voluntad del pueblo de ese Estado, de unirse permanentemente a la India o al Pakistán.

Sr. HSIA (China) (*traducido del inglés*): He escuchado atentamente los interesantes discursos de los representantes de la India y del Pakistán y estoy profundamente convencido de la complejidad y gravedad de la controversia. Deseo, por lo tanto, hacer mía la conclusión sensata de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, en la que se dice lo siguiente [S/1430, párrafo 278]:

"Las raíces de la controversia de Cachemira son profundas; poderosas corrientes ocultas de carácter político, económico y religioso han impedido, e impiden, la fácil y rápida solución de la controversia que divide a la India y el Pakistán."

Tal como la Comisión, mi delegación está convencida de que ambos Gobiernos "conocen perfectamente sus deberes y sus responsabilidades como miembros de las Naciones Unidas, y de que ambos desean una solución pacífica y definitiva de la cuestión de Cachemira".



Por lo tanto, creemos firmemente que los dos Gobiernos se dejarán guiar en sus deliberaciones por la razón y la moderación a fin de encontrar una solución pacífica a las dificultades actuales. Entre tanto, la situación exige de nosotros paciencia, perseverancia y espíritu político. Por este motivo, no me propongo hablar de los numerosos y complejos factores que rigen las relaciones de los Dominios hermanos. Como lo hace la Comisión, limitaré mis observaciones a los problemas concretos que plantea la aplicación del acuerdo concertado por la India y el Pakistán, conforme a las resoluciones del 13 de agosto de 1948 y del 5 de enero de 1949. Es lamentable, desde luego, que estos problemas concretos se hayan convertido en obstáculos verdaderos a la aplicación del acuerdo de tregua. Esas mismas dificultades son las que han hecho inaceptables las proposiciones del General McNaughton. Los problemas a los cuales aludo son los que se refieren a la disolución de las fuerzas de Cachemira *Azad*, al retiro de las tropas, a la defensa y a la administración de la zona septentrional. A este respecto deseo hacer una observación de carácter general y subrayo el hecho de que, según las conclusiones de la Comisión, las dificultades que se han encontrado para resolver estos problemas a satisfacción de los dos Gobiernos han sido desproporcionadas en comparación con su importancia real. Todas las partes interesadas han convenido en que sólo un plebiscito libre e imparcial resolverá definitiva y pacíficamente la cuestión de Cachemira y en que se debe celebrar ese plebiscito lo antes posible. Si la India y el Pakistán desean sinceramente lograr este objetivo, ninguno de estos llamados problemas tendrá una importancia real y permanente, pues sólo la tiene como cuestiones preliminares a la organización de un plebiscito satisfactorio.

Tratemos primero la cuestión de las fuerzas de Cachemira *Azad*. Considero que la Comisión tiene mucha razón en subrayar que las fuerzas *Azad* son ahora bastante poderosas para modificar la situación militar, y que, en esas condiciones, es mucho más difícil organizar el retiro de las fuerzas, las de la India en particular. La Comisión admite con bastante pesar que si "hubiera podido prever que el período de cesación del fuego se prolongaría durante la mayor parte de 1949, y que el Pakistán emplearía dicho período para consolidar su posición en el territorio de Cachemira *Azad*, la Comisión habría tratado dicha cuestión en la parte II de la resolución del 13 de agosto" [S/1430, párrafo 225].

Es igualmente importante señalar a la atención el párrafo por el cual la Comisión concluye su análisis de este problema [S/1430, párrafo 226]:

"No se puede decir que ninguna de las dos partes haya cumplido lo dispuesto en la sección B de la parte I de esa resolución que prohíbe a ambos países todo aumento de su potencial militar en el territorio de Jammu y Cachemira".

Es verdad que la resolución del 13 de agosto no alude a las fuerzas *Azad* ni tampoco a la manera ni a la fecha en que esas fuerzas deben ser disueltas. ¿Pero cuál es en realidad la diferencia entre el punto de vista de la India y el del Pakistán a este respecto? Por una parte, tenemos la declaración del Gobierno del Pakistán, fechada el 30 de mayo de 1949 [S/1430/Add.1, anexo 49], según la cual la disolución de las fuerzas armadas que se hallen en el territorio será determinada por la Comisión y el Administrador del Plebiscito, previa consulta con las autoridades locales, conforme al inciso b) del párrafo 4 de la resolución aprobada por la Comisión el 5 de enero de 1949. Mi delegación considera esta declaración como una seguridad de que las fuerzas *Azad* serán retiradas,

o de que se dispondrá de ellas de alguna otra manera, antes de la fecha del plebiscito. Por otra parte, tenemos el memorándum del Gobierno de la India fechado el 18 de mayo de 1949 [S/1430/Add.1, anexo 48], en el cual este Gobierno declara que "es de trascendental importancia iniciar las discusiones relativas al procedimiento y a las etapas para la disolución y desarme, inmediatamente después de la firma de la tregua."

Parece por lo tanto haber ahí un considerable acuerdo con respecto a la idea de que se debe disponer de alguna manera de las fuerzas *Azad*, y de que esto se deba hacer antes de la celebración del plebiscito. En este caso, la cuestión puede ser fácilmente resuelta a condición de que los dos Gobiernos se pongan de acuerdo sobre la fecha exacta en la cual deba comenzar el retiro de las fuerzas *Azad* y sobre la extensión del plazo que debe transcurrir entre el retiro de las fuerzas y el plebiscito. Indudablemente esta cuestión no será tan difícil de resolver si ambas partes dan pruebas de la buena voluntad necesaria.

El retiro de las fuerzas es el segundo problema que impide a las partes llegar a un acuerdo. Es muy lamentable que hayan surgido desacuerdos y malentendidos en cuanto al retiro de las tropas de Cachemira. El Pakistán sostiene que el retiro de sus tropas regulares depende de que su Gobierno acepte planes conducentes a la sincronización de ese retiro con el retiro de la mayor parte de las tropas indias; la India, por su parte, sostiene que las etapas del retiro de las tropas indias y el efectivo de las fuerzas indias que permanezca en el Estado son asuntos que deben resolver por negociaciones la Comisión y el Gobierno de la India.

Se ha exagerado la importancia de este desacuerdo porque cada una de las partes da a la cuestión del retiro de las tropas un significado político como si el arreglo de la cuestión de la incorporación del Estado de Jammu y Cachemira a la India o al Pakistán dependiera de la manera en que se retiraran las fuerzas respectivas de esos Estados o de las etapas de ese retiro. Ambos Gobiernos saben perfectamente que las disposiciones relativas al retiro de las fuerzas se inspiran ante todo en consideraciones que tienen por objeto mantener la paz y el orden público en las regiones interesadas y que no prejuzgan de ninguna manera el arreglo definitivo de la cuestión de la incorporación política. Parece que la Comisión apreció bien el problema cuando el 15 de abril de 1949, en las proposiciones [S/1430/Add.1, anexo 17] presentados a los Gobiernos de la India y del Pakistán tendientes a la aplicación de la parte II de su resolución del 13 de agosto de 1948, propuso un plan para el retiro de las tropas. Para mi delegación esta solución sigue siendo buena. Los dos Gobiernos debieran llegar a un acuerdo general sobre el momento oportuno para el retiro de las fuerzas de la India y del Pakistán. No se trata aquí de saber cuál se retirará en primer lugar. Se trata de adoptar medidas prácticas.

Por último, tenemos la cuestión de la defensa y administración de la región septentrional. Sobre este punto en particular, la Comisión se encuentra en una situación muy embarazosa a consecuencia de las reivindicaciones contradictorias de la India y del Pakistán. En el párrafo 273 de su tercer informe provisional [S/1430], la Comisión expone muy claramente las razones por las cuales se negó a reconocer las reivindicaciones de la India. El párrafo de que se trata dice lo siguiente:

"No sólo se había puesto en tela de juicio la autoridad del Gobierno del Estado, el 1º de enero de 1949 se había eliminado de la región la autoridad del Gobierno de

Jammu y Cachemira. La entrada de las fuerzas de la India en la región situada al norte de la línea fijada para la cesación del fuego, hubiera provocado casi inevitablemente la reanudación de las hostilidades. En consecuencia, la Comisión podía esperar que el Gobierno de la India, teniendo en cuenta el carácter enteramente temporal de la tregua, estaría dispuesto a renunciar a una reivindicación respecto de la cual había de tomarse una decisión en breve plazo al formularse las condiciones en que habría de celebrarse el plebiscito”.

Mi delegación quisiera hacer el mismo llamamiento al Gobierno de la India. Lo mismo que para la cuestión del retiro de las tropas, no prejuzgamos la cuestión de saber cuál será el dueño de la región septentrional. Abrigamos la esperanza de que el plebiscito resolverá esta cuestión. Pero en la actualidad, la misión del Consejo es impedir toda reanudación de las hostilidades y preparar el terreno para la celebración de un plebiscito libre e imparcial.

Se ha dicho que el Consejo de Seguridad pide a la India que haga concesiones al Pakistán o que pide al Pakistán que haga concesiones a la India. El Consejo de Seguridad no ha hecho nada de eso. El Consejo de Seguridad no desempeña el papel de corredor ni trata de hacer que las partes lleguen a una transacción o

preparen un negocio. Si el Consejo pide a la India o al Pakistán que hagan concesiones, no se trata de concesiones al Pakistán o a la India sino más bien de concesiones que faciliten la organización del plebiscito. Este último factor es el que ha dominado todo nuestro modo de pensar en esta cuestión. Mi delegación ha sostenido desde el principio que un plebiscito libre e imparcial es la única manera de llegar a una solución definitiva y pacífica de una controversia que desgraciadamente ha impedido la cooperación amistosa entre dos grandes pueblos del continente asiático.

Con respecto al proyecto de resolución presentado hoy por los representantes de Cuba, Noruega, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, deseo indicar que había preparado mi intervención antes de leer el proyecto de resolución. Los representantes del Consejo observarán que he tratado en mi declaración de algunos puntos mencionados en el proyecto de resolución y en las propuestas del General McNaughton. Si lo juzgo necesario y útil presentaré más adelante otras observaciones sobre el proyecto de resolución.

El PRESIDENTE: La próxima sesión del Consejo de Seguridad tendrá lugar, si no hay inconveniente, el próximo martes a las 15 horas.

*Se levanta la sesión a las 17.55 horas.*